

El enemigo principal del gobierno de ARENA

Duras son las tareas que enfrenta el nuevo gobierno de El Salvador. Todavía aparecen más complicadas si las examinamos a la luz de los métodos con que se las pretende realizar. Derrotar militarmente al FMLN, quitándole base social, no parece compatible con un programa económico que sacrifica principalmente a las mayorías empobrecidas, enajenándolas del proyecto gubernamental y contrainsurgente. Reactivar la economía del país no parece razonablemente alcanzable con la mitad del presupuesto nacional hipotecado en las faenas de la guerra y con los costos que el sabotaje supone para la producción y la inseguridad para la inversión. Terminar pronto con la guerra, manteniendo los niveles de violencia militar y represiva imperantes durante el gobierno de Duarte es un imposible probado por la experiencia y ampliamente deplorado por los ahora gobernantes areneros. Más violencia y más represión, por otra parte, no son la meta ni el camino para la profundización de un proceso democrático.

¿Cómo conciliar, en la realidad, estos propósitos tan fundamentales y tan radical y recíprocamente contradictorios del proyecto de ARENA? Los nuevos gobernantes parecen haber encontrado la respuesta a este círculo vicioso en un nuevo enfoque, en una visión global de la crisis nacional alternativa a la que se había venido manejando hasta el momento. Una visión de y

desde las élites económicas y de poder que fueron las causantes de esa crisis. La guerra ya no se llama guerra, sino cruzada contra el terrorismo; las libertades democráticas, como manifestaciones públicas, huelgas, denuncia y disensión en general, ya no son expresión de democracia, sino juego y complicidad subversiva; la injusticia social nunca habría sido tal, sino mala administración estatal. Todo el problema se reduciría entonces al mundo de la falsa imagen que a la gente y a la población se le habría dado del conflicto y de la crisis. Por lo tanto, ahora hay que hacer un esfuerzo propagandístico para corregir esta visión popular de la crisis nacional y así viabilizar el rescate nacional propuesto por ARENA. Después de todo, ¿no fue su bien montada estrategia publicitaria la que le rindió los mejores dividendos en las últimas dos contiendas electorales?

No vamos a sostener que en el gobierno de ARENA habita un genio del mal que ha ideado un modo tal de justificar mayores niveles de guerra y represión; de prometerle mejorías a los pobres recetándoles con buena administración mayores niveles de miseria; y de hacerles desconfiar de sus derechos ciudadanos y humanos como probable subversión. Porque mucho de mal aunque poco de genio parece haber en ARENA.

No pretendemos entrar ahora en el examen del sensible incremento de las acciones represivas del ejército, con cateos, capturas, torturas y asesinatos

en los sectores populares y hasta persecución al personal y a las instituciones internacionales que en favor de éstos trabajan. Tampoco pretendemos detenernos en el estudio de las catastróficas repercusiones que las medidas económicas gubernamentales están provocando en los sectores populares; ni en los efectos intimidatorios ni en los propósitos totalitarios y anticonstitucionales subyacentes en las reformas propuestas por el presidente Cristiani a los códigos Penal y Procesal Penal.

De lo que se trata es de proporcionar una perspectiva de lo que sobre esto proyectan los organismos de prensa y difusión del gobierno, del ejército y de la derecha, sobre todo en lo que dicen respecto a la guerra. Por supuesto que todo gobierno o grupo de poder tiene el derecho, los medios y la natural inclinación a imponer su visión y perspectiva de la realidad. Lo que aquí se muestra y cuestiona es el modo privilegiado con que esto ha comenzado a imponerse, tergiversando, distorsionando y parcializando brutalmente la actitud y las declaraciones, no del "enemigo principal," tal como el presidente Cristiani llamó al FMLN en su discurso pronunciado ante el gremio periodístico el 12 de julio; sino de los otros muchos enemigos secundarios implícitos en su expresión. Lamentablemente, en la práctica, observamos, que el nuevo gobierno ha extendido de modo intolerable la clasificación de enemigo a todo aquel que se oponga o disienta de la política gubernamental. En el citado discurso, el presidente llegó a inculpar y responsabilizar a todos los partidos políticos de oposición de "hacerle el juego al FMLN y colocarse irresponsablemente en la misma línea estratégica del enemigo principal de nuestro pueblo," y todo porque los partidos se negaron a participar en las maniobras de la propuesta de diálogo al FMLN anunciada en su discurso inaugural.

Nadie que conozca la historia del país en la década que está por finalizar puede responsabilizar a la democracia cristiana de hacerle el juego al FMLN, y otro tanto cabe afirmar del Partido de Conciliación Nacional, el cual en diversas

oportunidades unió fuerzas con ARENA en campañas electorales o en abierta y combativa oposición a la otrora gobernante democracia cristiana. Días después, la Secretaría Nacional de Comunicaciones (SENCO) recogía la tesis presidencial, y en comunicado oficial ampliaba los términos de la acusación a la firme oposición partidaria a las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal propuestas por el gobierno; a la crítica partidaria a la política económica del gobierno, la cual consideraba como participación en la estrategia del FMLN y, finalmente, al no hacer coro, junto al partido gobernante, en la campaña que éste ha orquestado responsabilizando al anterior gobierno de los males sufridos por la población en el pasado. Esto ha sido considerado como hacerle el juego a la subversión. A la Secretaría Nacional de Comunicaciones le parece que también es hacerle el juego al FMLN denunciar los males que ya ha comenzado a causar la política económica del gobierno actual.

Por primera vez en lo que va del proceso democrático se afirma que la oposición política en pleno, de centro derecha a centro izquierda, es aliada de la subversión. Lo que es peor, se la ha calificado de ese modo no por oponerse a los objetivos proclamados en la política del gobierno, sino por discrepar en los métodos adoptados por aquél para su consecución, los cuales, obviamente, pueden y deben ser diversos si es que el pluralismo político ha de seguir siendo parte del proceso de democratización.

En el terreno de lo religioso, socio-laboral y académico hace tiempo que el pluralismo es combatido como asociación subversiva; pero también en esto hay novedad, pues ahora se ha reemprendido la persecución con redoblado esfuerzo y virulencia. El pasado mes de abril comentamos los ataques gratuitos y temerarios contra la Iglesia. La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" corrió la misma suerte, al ser víctima de una campaña de difamación y acusaciones que culminó el pasado 22 de julio, cuando en horas de la madrugada fue dinamitada la imprenta universitaria, talleres de su imprenta.



Mientras el gobierno y el partido en el poder consideran como cooperación con el FMLN todo aquello que se oponga o difiera de sus políticas y estrategias, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), los frentes de fachada de la ultraderecha y las gremiales del gran capital han reducido todo y sólo el accionar del FMLN a puro terrorismo. No es que los rebeldes no hayan incurrido en prácticas terroristas, como el asesinato de funcionarios gubernamentales y de ideólogos de derecha, pero no son responsables de todo lo que se les imputa (ver "La *intelligentsia* de derecha acosada," *ECA*, 488, junio de 1989). Los mismos rebeldes han reconocido y lamentado el uso de artefactos explosivos, cuyo uso ha dañado a la población civil. Aún con ello, la actividad terrorista de los rebeldes no es, ni de cerca, el problema más grave y generalizado del país, ni mucho menos puede identificarse con aquél, el gran problema nacional de la guerra y sus causas.

Con mucho, los casos de violación de los

derechos humanos, de los cuales se guarda registro confiable, siguen siendo mayoritariamente responsabilidad del ejército y son bien conocidos y documentados los múltiples casos de desinformación con que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado sorprende al ejército, cuyos voceros se apresuran a imputar al FMLN crímenes cometidos por él. Sin embargo, de esta pretendida cruzada contra el terrorismo iniciada por el gobierno, el ejército y la derecha lo preocupante es que, además, de ignorar la realidad o de deformarla grotescamente, se hace cada vez más abiertamente contra la legalidad y la constitucionalidad, en cuyo nombre el gobierno excusa sus limitaciones y negativas para acordar un cese del fuego y una negociación con la guerrilla para poner fin a la guerra. Los promotores de esta campaña no han dudado en responsabilizar al FMLN de los crímenes cometidos durante los últimos meses contra políticos e ideólogos de derecha y de acusarlo de terrorismo, sin esperar

siquiera el resultado del primer peritaje y sin tener pruebas en las cuales fundamentar sus acusaciones. Esta convicción apriorística, al menos de parte del gobierno, es grave porque pudiera dar pábulo al terrorismo de grupos de ultraderecha, los cuales medran a la sombra del maniqueísmo que descarga en el FMLN todo crimen o atentado ocurrido en el país; y con ello lo que se evidencia no es sana preocupación por hacer valer los principios y procedimientos de la justicia, ni siquiera un rechazo sincero contra el terrorismo, sino el afán de desprestigiar y debilitar política y militarmente al FMLN.

Todavía más temerario e irresponsable es acusar de tales atentados a la dirigencia de instituciones académicas, como a los jesuitas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y a las autoridades de la Universidad Nacional sin aportar el más mínimo indicio para semejante vesania. No obstante, *El Diario de Hoy*, con su habitual recurso de citar a sus "informantes," que para deshonra de la institución armada identifica como fuentes militares, habría encontrado el modo de deducir periodísticamente esas responsabilidades. Según este matutino, una de sus llamadas fuentes militares le habría proporcionado la primicia al informarle que el ataque contra la UCA el 22 de julio era un "auto-atentado," con el propósito de "desvincular a ciertos individuos de la UCA de los últimos atentados perpetrados contra ideólogos" de extrema derecha. Por lo general, el fanatismo ultraderechista de este medio de comunicación confunde el pensamiento de sus fuentes con su propia línea propagandística. Hace dos meses atrás, cuando la agresión verbal contra la UCA culminó en el primer atentado dinamitero en contra de sus talleres gráficos, *El Diario de Hoy* lamentó editorialmente que "tales bombas menores no hicieran ningún perjuicio sustancial," concluyendo que sólo se prestaban "para fabricar mártires y justificar posteriores terrorismos." Así, el vaticinio del editorial se hizo realidad en la revelación de la fuente militar anónima, paradójicamente, con dos atentados dinamiteros contra la UCA como pruebas de su actividad delictiva.

Tan disparatados y sumarios enjuiciamientos y condenas propagandísticas han culminado lógicamente en una carta abierta de la Cruzada Pro Paz y Trabajo dirigida al presidente Cristiani el 5 de julio, en la cual le reclamaban el incumplimiento de sus promesas electorales, le solicitaban la implantación de la pena de muerte y la condena en juicio sumario en contra de dos sacerdotes de la UCA, de dos dirigentes de la Convergencia Democrática y de cuatro sindicalistas entre otros. Este modo tan fanatizado y peregrino de concebir la justicia encuentra en los escuadrones de la muerte el instrumento eficaz. De hecho, los crímenes y atentados cometidos por éstos encuentran motivo y justificación en aquella propaganda antiterrorista.

También las gremiales empresariales del gran capital han unido fuerzas con el ejército y con ARENA en la campaña por hacer de la guerra en El Salvador una cruzada contra el terrorismo del FMLN. El 25 de abril, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador dio a conocer su preocupación por los diez años transcurridos "desde que el terrorismo iniciara una lucha armada por lograr la conquista del poder" y demandaba del gobierno y de la Fuerza Armada "medidas concretas para hacer cumplir las leyes y la Constitución nacional..." Dos meses después, a raíz del asesinato del Ministro de la Presidencia, Dr. Rodríguez Porth, la ANEP retomó la iniciativa, erigiéndose en abanderada de la causa contra el terrorismo, decretando un paro de actividades empresariales y reclamando al gobierno la aplicación de leyes que garantizaran sus bienes y personas. Todo ello, por supuesto, en nombre del pueblo salvadoreño. (El gobierno respondió pronto a este sentido clamor empresarial introduciendo a la asamblea legislativa su propuesta de reformas a los códigos Penal y Procesal Penal.) Estas gremiales rechazaron participar con las más diversas fuerzas sociales en el debate nacional, auspiciado por la Iglesia para alcanzar la paz. Si la causa de la paz pasa por el camino de la negociación, no es buena para los grandes capitalistas. Para ellos es más conveniente la causa

contra el terrorismo, entendida desde la parcialidad desde la cual estas élites siempre han entendido la desgracia y la miseria de El Salvador. Ahora, la causa contra el terrorismo se ha convertido en la alternativa para combatir la causa popular por una paz negociada.

Por su parte, el COPREFA y los frentes de fachada que últimamente han probado su alineamiento incondicional con la perspectiva de guerra psicológica sustentada por aquél, como los autodenominados Comité pro rescate de la Universidad Nacional, el Comité cívico patriótico y otro de más reciente aparición, el Comité nacional para la defensa de la paz en occidente, han multiplicado sus campos pagados. En ellos no sólo han repudiado al terrorismo del FMLN, sino que también se han esforzado por deducir responsabilidades y complicidad delictiva, como justificación del terrorismo, en instituciones y organizaciones que no han participado de su visión ni han condenado unilateralmente los delitos cometidos o infundadamente imputados al FMLN. Un comunicado del COPREFA, publicado el 17, acusaba de complicidad delictiva a las instituciones humanitarias y a los "púlpitos de la Iglesia donde son leídas las homilias" porque no habían condenado precipitadamente a la insurgencia por la muerte de un regidor municipal. Posteriormente se comprobó que el FMLN no participó en tal asesinato. Dos días antes que la UCA fuera víctima del último atentado dinamitero y tres días después de producirse un serio incidente entre los estudiantes de la Universidad Nacional y los soldados de la Primera Brigada de Infantería, quienes habían tendido un cerco militar alrededor del recinto universitario, con un saldo de 20 estudiantes heridos, el Comité pro rescate responsabilizó a los jesuitas de la UCA y a las autoridades de la Universidad Nacional de pretender minimizar y

justificar los asesinatos de los ideólogos de la derecha. Y ello porque ambas instituciones repudiaron tales crímenes en el marco general del agravamiento del conflicto y de la violencia de los últimos meses. Actividad delictiva y justificación del terrorismo son, para estos cruzados del antiterrorismo, mantener el elemental principio científico de desentrañar la causa y naturaleza de la crisis, atendiendo a su globalidad histórica.

Este sedicente antiterrorismo y preocupación por el imperio de la justicia que caracteriza a la campaña propagandística del gobierno y de sus aliados de derecha, no sólo ignora la realidad y agrede y desacredita a sus oponentes, sino que se traduce en descarnado guerrerismo, cuando las mismas autoridades militares admiten públicamente encontrarse por encima de la constitución y el derecho en su combate contra el FMLN y las organizaciones populares, a las cuales considera como su fachada. El pasado 24 de abril, miembros del Alto Mando sostuvieron que "no es necesaria una orden de captura cuando se procede en el marco de una guerra sucia." Un mes después, el director de la Policía de Hacienda, coronel Heriberto Hernández, confirmó que sus unidades capturaban sin hallarse debidamente uniformadas y en vehículos sin la adecuada identificación porque de otro modo no podía hacer dichas capturas. En pocas palabras, para alcanzar la paz por la vía de la negociación no es posible hacer una interpretación flexible de la constitución, pero sí se la puede violar abiertamente para intentar ganar la guerra por la vía militar; y lo que es peor, recurriendo a los típicos métodos terroristas con que los escuadrones de la muerte secuestran, asesinan y desaparecen a sus críticos y opositores.

A. C.